

Elecciones, guerra y negociación en El Salvador

*Gabriel Gaspar Tapia**

El 10 de marzo de 1991, se llevaron a cabo elecciones parlamentarias y municipales en El Salvador.

En dicha oportunidad sufragó cerca del 50% de la ciudadanía. Este hecho es interpretado de diferentes maneras. Para el partido ARENA, actualmente en el gobierno, y en general para las fuerzas del bloque dominante (empresarios, Alto Mando de la FA, intereses norteamericanos), representa una manifestación de valentía cívica del pueblo salvadoreño frente a las amenazas de la guerrilla; es una reafirmación del rechazo de la población al terrorismo, a la insurgencia; una confirmación de la tendencia mundial que derriba muros, y opta por la libertad, la democracia y la economía de mercado. En el extremo opuesto, la insurgencia aglutinada en el FMLN valora el elevado abstencionismo como una demostración del rechazo de la población a una democracia formal que maquilla una operación de contrainsurgencia, un sistema político que no resuelve los problemas más acuciantes de la mayoría de la población.

*Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa.

Ante esta disparidad de opiniones nos asaltan varios interrogantes: ¿Cómo interpretar un mismo hecho que genera tan diferentes opiniones? ¿Cuál será el impacto real de este proceso electoral en el proceso político salvadoreño? ¿En qué afecta a la correlación de fuerzas el reciente proceso electoral? ¿Cómo se articula con el proceso de diálogo que se lleva a cabo en forma paralela? El propósito del presente artículo es el de enfrentar estos interrogantes buscando interpretar el hecho electoral dentro del marco general del proceso político de dicho país. Antes de entrar en el examen de la coyuntura, creemos indispensable realizar una presentación mínima que le dé contexto.

El contexto del proceso electoral

Una adecuada interpretación del reciente proceso electoral y su impacto supone precisar algunos elementos:

1. El proceso político salvadoreño es un conjunto complejo de elementos, de los cuales el más sustantivo es el enfrentamiento que se da en términos militares entre las fuerzas del Estado y la insurgencia aglutinada en torno al FMLN. La guerra no es más que la expresión política de la contradicción que generó la desestructuración de la dominación oligárquica a fines de los años setenta y la movilización de las clases subalternas que se colocaron en una pretensión de control estatal y societal. La centralidad de la guerra está dada entonces por la disputa hegemónica que se establece entre las partes contendientes.

2. Sin embargo la guerra, que se ha prolongado por más de una década, no es el único elemento del proceso político. En forma creciente, en particular en los últimos años, la demanda de pacificación del país —por ende un cese al fuego y una desmilitarización de la sociedad— se ha transformado en una de las ideas que provoca mayor consenso y movilización. Esta demanda ha encontrado un canal institucional a partir de la formalización de las negociaciones que el FMLN y el gobierno acordaron, con la mediación de la ONU, el 4 de abril de 1990, en la reunión de Ginebra. A partir de dicha fecha se han desarrollado varias reuniones entre ambas partes, en un proceso de flujos y reflujos que han concluido una primera fase con la firma de los llamados "Acuerdos de México", suscritos a fines de abril en la ciudad de México y sometidos posteriormente a la aprobación del Poder Legislativo salvadoreño.

3. Junto a estos procesos, el de la guerra y el de la negociación, a lo largo de la década de los ochenta, se ha impulsado, desde el Estado, una reconversión del sistema político que incluye el desarrollo de mecanismos electorales para la generación de las autoridades de los poderes ejecutivo y legislativo. La conformación de este sistema político se abrió con una fórmula inicial que expresó la alianza de las fuerzas armadas con el Partido Demócrata Cristiano (PDC), liderado por el presidente José Napoleón Duarte (con el explícito apoyo político, económico y militar de los EE UU), a finales de los ochenta, el PDC fue desplazado del control del aparato de gobierno por el partido ARENA, expresión renovada de las clases económicamente dominantes.

4. Pero el mapa de fuerzas políticas salvadoreñas es mucho más complejo que la polaridad ARENA-FMLN. En estricto sentido, el gobierno de Alfredo Critiani (fuerzas armadas incluidas) y el FMLN representan a las partes armadas del arco político, pero no a todas las partes; para empezar, existen varias fuerzas políticas que quedan fuera de esta polaridad. Ellas son:

- a) En el campo de los sectores conservadores, subsiste el remanente del viejo Partido de Conciliación Nacional, PNC, antiguo aliado de las fuerzas armadas en la época de las dictaduras oligárquicas. A ellos se sumó en 1988 el Movimiento Auténtico Cristiano, MAC, escisión conservadora de la Democracia Cristiana.
- b) En el centro político permanece como un actor de primera importancia el PDC, el cual ha iniciado desde su paso a la oposición (junio 89) un proceso de reorganización interna y de acercamiento con las fuerzas progresistas.
- c) En el sector progresista se ha consolidado la alianza de partidos que bajo el nombre de "Convergencia democrática" representa a los sectores políticos y sociales identificados con la transformación social. A la Convergencia, surgida del retorno al amparo de los acuerdos de Esquipulas, de dirigentes políticos exiliados en 1987, se ha sumado la reactivación de la Unión Democrática Nacionalista, UDN, de inequívocos vínculos con el Partido Comunista Salvadoreño, integrante del FMLN.
- d) Lo anterior aporta pruebas de la relación entre las fuerzas político-partidarias, pero a ellas deben agregarse las organizaciones sociales y corporativas que en momentos cobran

mayor centralidad y protagonismo que los partidos. En el campo empresarial encontramos a la poderosa Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, junto a la Cámara de Comercio e Industria; en el sector sindical hallamos a dos centrales: la Unión Obrero Campesina, UNOC, de filiación demócratacristiana, y la Unidad Nacional de Trabajadores Salvadoreños, UNTS, de orientación izquierdista.

- e) Para completar el cuadro nacional, además de los partidos y los movimientos sociales, existen instituciones de gran peso político y/o ideológico: las Fuerzas Armadas, la Iglesia y las Universidades, en particular la Nacional y la Centroamericana, dirigida por los jesuitas (la UCA).

Por tanto, luego de esta sumaria descripción de fuerzas políticas nacionales (a las que indudablemente hay que sumar los actores internacionales presentes en El Salvador de los cuales el más decisivo es el gobierno estadounidense, podemos asumir algunas hipótesis provisionales para el examen del proceso electoral:

- Las elecciones constituyen un elemento del complejo proceso político salvadoreño, pero no es por el momento, el central, aunque su importancia ha ido en crecimiento. Las elecciones forman parte, junto con la guerra y el diálogo-negociación, de los elementos más permanentes del proceso político. Estos elementos de tipo jurídico-político se suman al permanente conflicto de intereses que se establece en toda sociedad entre los

diversos actores sociales, que en el caso salvadoreño pasa en lo fundamental por el rechazo o impulso a la política económica que formula el gobierno en turno.

- En forma creciente, el debate electoral y las modalidades de la consulta electoral (empadronamiento, participación de la oposición, observación, tribunal calificador, etc.) se han ido entretrejiendo con los temas de la negociación de paz. El hecho desencadenante de esta articulación progresiva entre procesos electorales y el diálogo-negociación se sustenta en la disposición del FMLN a incorporarse a la lucha política (y electoral, dado el caso) como conclusión de un proceso de pacificación y democratización.
- Como es obvio, en las coyunturas electorales (campanas, elecciones y recuento), éstas monopolizan en gran medida el proceso político con un indudable peso específico que internamente asumen los partidos; pero una vez dirimida la consulta, los otros procesos (la guerra y el diálogo-negociación) vuelven a asumir el protagonismo.
- De esta manera, los procesos electorales se han ido transformando en un campo de negociación entre las partes armadas y, al mismo tiempo, en una arena de medición de fuerzas entre los partidos políticos.
- Así, aunque las elecciones no pongan necesariamente en juego posiciones estratégicas, permiten delimitar la correlación de fuerzas del sistema político y éstas se condicionan recíprocamente con el campo de maniobras de las partes que negocian el fin de la guerra. En otras palabras, a las elec-



ciones no concurren ni el FMLN ni las fuerzas armadas directamente; su poder militar, su control territorial, su estructura interna, entre otros aspectos, no se ven afectados de manera directa por el resultado electoral, pero indudablemente éste influirá en el curso que siga la negociación, sobre todo cuando se advierte que los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación deben ser refrendados por el poder legislativo donde sólo participan los partidos políticos.

El proceso electoral. Continuidad y cambio

Las elecciones recientes presentaron características similares a las que les antecedieron aunque hubo novedades. A lo largo de la década de los ochenta ARENA y la Democracia Cristiana fueron las principales fuerzas políticas animadoras de estos procesos, con la permanencia del viejo PCN en marcado declive. A finales de los ochenta, en las elecciones presidenciales de 1989, concurrió la Convergencia Democrática que obtuvo un débil resultado (cerca de un 4%). En las últimas elecciones se agregaron elementos nuevos:

- a) El más importante: que por primera vez, en lo que va de la guerra, y en lo que lleva vigente el nuevo sistema político, coincidió el proceso electoral con el proceso de diálogo-negociación. En el pasado existieron iniciativas de diálogo, pero nunca coincidieron con los procesos electorales, ni su agenda tomó en consideración una eventual participación de la insurgencia.¹ Asimismo, ésta fue la primera oportunidad en que el tema de las características del proceso electoral inserto en la discusión de las reformas constitucionales que la guerrilla demanda para su desmovilización estuvo en la mesa de negociaciones. Así, el proceso de diálogo-negociación se empató con el proceso electoral. Las características del proceso electoral eran debatidas en la mesa FMLN-ONU-Gobierno y, a su vez, el diálogo-negociación se mantuvo como un tema de campaña.
- b) Como resultado de lo anterior, la insurgencia modificó su conducta respecto a las elecciones en curso. En el pasado había mantenido una línea de rechazo a las mismas; declarado boicots y decretado paros de carretera, basando su conducta en el desconocimiento de la legalidad del sistema político. En esta oportunidad introdujo variantes a esta política; si bien no apoyó su celebración, tampoco impuso restricciones mayores a su desarrollo, salvo aquéllas relacionadas con el control de sus zonas estratégicas. Al mismo tiempo, para nadie fue un misterio que las fuerzas sociales, personalidades y activistas en general de las zonas urbanas, identificados con las posiciones de la insurgencia, esta vez tomaron una actitud más activa en favor de los partidos de izquierda que participaban en la contienda. Ese es el otro factor novedoso.
- c) En esta oportunidad, además de los partidos de la Convergencia Democrática (en lo fundamental, el antiguo Frente Democrático Revolucionario, aliado político del FMLN), que ya había incursionado en la anterior campaña presidencial de 1989, se agregó la Unidad Democrática Nacionalista, UDN, que mantiene estrechos vínculos con el PC. Así, militantes y simpatizantes de izquierda se sumaron a las tareas de la Convergencia y de la UDN.
- d) La otra novedad en relación con elecciones anteriores fue que por primera vez desde que se implantó la actual Constitución, el partido de derecha ARENA concurrió como fuerza de gobierno. Y la Democracia Cristiana se ubicó por su parte como fuerza de oposición que, como ya se señalaba, se orientó desde hacía tiempo hacia una política

de entendimiento con las fuerzas de la Convergencia.

De este modo, las elecciones del pasado 10 de marzo presentan elementos de continuidad y de cambio en relación con el pasado.

El proceso electoral empezó progresivamente a copar el proceso político y tanto el desarrollo de las acciones armadas como las gestiones de la mesa de negociaciones, sin desactivarse plenamente, pasaron a un plano más discreto. Las razones de esto eran más evidentes.

Para el bloque dominante en general, y para el partido ARENA en particular se trataba de obtener una victoria resonante en las elecciones, demostrar que era el partido mayoritario, que la democracia cristiana estaba agotada y que la izquierda era una minoría. Con esa base política, ARENA esperaba enfrentar *a posteriori* las negociaciones de paz, pero en condiciones de fuerza.

La oposición, por su parte (tanto la política: democracia cristiana y convergencia; como la armada, representada por el FMLN) aspiraba a infligir una derrota política a ARENA. Para el FMLN ello redundaría en el deterioro de las posiciones del propio gobierno de Cristiani así como de las fuerzas armadas; para la democracia cristiana, una derrota de ARENA o una merma sensible de su caudal perfilaría su derrota segura en las futuras elecciones presidenciales de 1994. La Convergencia aspiraba a transformarse en una fuerza protagónica del sistema político para "ampliar los espacios" del proceso de democratización y así contribuir a la pacificación del país.

La campaña no estuvo exenta de actos de violencia: el diario *Latino*, de oposición de izquierda, fue incendiado por manos anónimas que nunca fueron descubiertas; el ejército aprovechó el repliegue parcial que hizo el FMLN (como gesto de buena voluntad para no entorpecer las elecciones) para tratar de consolidar posiciones en las zonas aledañas a la retaguardia insurgente. Locales de la Convergencia fueron víctimas de atentados dinamiteros y allanamientos injustificados. Paralelamente, el Consejo Central de Elecciones realizaba una sistemática campaña de invitación a la inscripción electoral y a la participación. Misiones de observadores de OEA empezaron a hacerse presentes para supervisar los comicios.

La mesa de negociaciones quedó en un com-pás de espera. Al cumplirse el plazo fijado inicialmente para alcanzar un acuerdo (septiembre de 1990) ambas partes fueron anuentes a pasar a negociaciones más privadas y confidenciales y, al mismo tiempo, a conferirle mayores atribuciones al mediador designado por el Secretario General de la ONU, nombramiento que recayó en el peruano Alvaro de Soto. Este último, a finales del año pasado presentó a las dos partes un amplio y profundo documento que incluía casi todos los temas en discusión (desmilitarización, depuración de las fuerzas armadas, supervisión de los acuerdos, cese al fuego, etc.) A partir de entonces tanto la delegación de gobierno como la del FMLN se adentraron en el estudio del documento y la realización de contrapropuestas. Este proceso se paralizó parcialmente por las elecciones. Y como ya indicábamos anteriormente, ni la delegación del FMLN ni la

gubernamental querían apostar a suscribir un acuerdo en la espera de la medición de fuerzas que iban a representar las elecciones del 10 de marzo.

Así, llegó el día de los comicios y a las pocas horas se perfiló el resultado que, en definitiva, fue el siguiente:



CUADRO 1 RESULTADO DE ELECCIONES PARLAMENTARIAS Y MUNICIPALES DE MARZO DE 1991

Estimación de población	2 800 000
Total de inscritos	2 581 583
Votantes con carnet	2 180 000*
VOTACIÓN	
Total de votos válidos	1 051 481
Total de votos no válidos	101 013**
Total de votos emitidos	1 153 013
ARENA	466 091
PDC	294 029
PCN	94 531
MAC	33 971
Convergencia	127 871
UDN	28 206

*Según modificaciones legales, no basta con estar inscritos, se debe, además, disponer del carnet electoral que se entrega después de la inscripción.

**Se suman blancos, nulos e impugnados.

Fuente: Consejo Central de elecciones. Banco de datos CINAS San Salvador. La cifra de población en edad de votar corresponde a proyecciones de población; el número estimado de electores con carnet resulta de estimaciones de la delegación supervisora de la OEA.

El resultado electoral y perspectivas

Una primera lectura de los datos que muestra el cuadro precedente indica a simple vista lo siguiente:

a) El elevado nivel de abstencionismo no se altera, a pesar de ampliarse el número de partidos políticos participantes.

Si comparamos con anteriores procesos electorales veremos que el nivel de participación ciudadana ha ido decayendo de manera progre-

siva en los últimos años. Esto se refleja en el siguiente cuadro:

Como puede observarse, el abanico de fuerzas políticas participantes se ha ampliado en las dos últimas consultas (1989 y 1991). Sin embargo, ello no se ha traducido en un incremento de la votación; más bien tiende a consolidarse un elevado índice de abstencionismo que se ha estabilizado en cerca del 50%. Contrasta con esto el elevado índice de inscripción en el registro electoral, que en esta oportunidad alcanzó una cifra cercana al 50% del total de población en edad de votar.²

CUADRO 2
ELECCIONES SALVADOREÑAS EN LA ÚLTIMA DÉCADA

	1982 (Const)*	1984 (Pres)	1988 (par y mun)	1989 (Pres)	1991 (par y mun)
Padrón		2 581 203			2 581 593
ARENA	383 632	376 917	451 184	505 370	466 091
PDC	526 890	549 727	335 789	338 369	294 029
PCN	248 964	244 556	85 000	38 218	94 531
MAC					33 971
CD				35 642	127 855
UDN					28 206
Otros ¹					
Nulos	51 438	104 557			
Blancos	131 498	41 736			
Impugnados	6 412	6 924			
Total	1 308 550	1 419 493		1 003 153	1 051 481

*Const: Constituyente

*Pres: Presidencial

A tales datos debemos agregar que en esta ocasión, a diferencia de las anteriores elecciones, el FMLN no decretó un boicot a las mismas, por tanto la población no se vio sometida a un clima de guerra durante el día de la votación ni vio impedido su desplazamiento a los centros de votación por los ya tradicionales paros de carretera que el FMLN disponía en estas oportunidades y que por las buenas o por las malas se respetaba.

¿Qué razones pueden explicar este alto índice de abstencionismo? No hay mediciones afinadas al respecto, pero a modo de hipótesis podemos sugerir lo siguiente: buena parte de la población, en particular la más humilde, no ve en las elecciones un medio eficaz para resolver sus problemas más inmediatos. Esto no debe interpretarse necesariamente como una actitud en contra del sistema, dado que esta misma población no impugna con posterioridad al hecho electoral la legitimidad de las autoridades que de allí surgen.

El elevado abstencionismo en nuestra opinión, sugiere más bien un marcado desinterés de la población en mecanismos que no desembocan en soluciones concretas para sus problemas de sobrevivencia. Con lo anterior no negamos que un porcentaje de este abstencionismo sea de tipo militante, motivado por razones ideológicas, pero creemos que pueda aducirse con respecto a la mayoría.

Claro que es un nivel de abstencionismo casi igual al de los Estados Unidos o al de México, países que no están en guerra y que no sufren convulsiones políticas como la salvadoreña. Tal hecho permite al régimen mostrar el proceso

como un logro democrático de consideraciones, tomando en cuenta la situación bélica. En nuestra visión, más bien se trata de miles y miles de salvadoreños que están tan preocupados por su sobrevivencia económica, que no prestan mayor interés al juego político electoral, en el cual tienden a ver a la mayoría de los partidos como parte de lo mismo, lo cual motiva una actitud desesperanzada y escéptica en lo tocante a las elecciones.

A lo anterior debemos agregar un porcentaje no precisable de abstenciones producto del temor. En medio de la campaña la población fue amenazada y atacada por los caciques locales, a menudo con el apoyo del ejército. Esto se puede sumar a lo anterior: si el sistema sirve poco para resolver los problemas básicos, y encima, el participar puede acarrear peligro para la persona, su familia o su propiedad, entonces la conducta abstencionista es explicable.

Es interesante detenerse un poco en el tema de la intimidación durante los procesos electorales. En el caso salvadoreño esto podría tener dos vertientes: la intimidación de parte del ejército y los paramilitares, en contra de la oposición; y la intimidación que el FMLN ejerce sobre la población en las zonas que controla.

Con respecto a la primera, obviamente la intimidación es achacable a quien pueda efectivamente ejercerla, o sea, a quien tiene la fuerza armada o es apoyado por ésta. Es el caso de la ultraderecha, y sería abusivo extender esta característica o práctica a ARENA en su conjunto, porque en realidad el tema de la intimidación y el control de la población es muy antiguo en El Salvador; su antecedente más cercano fue la

organización paramilitar ORDEN que surgió en los gobiernos del PCN. en la actualidad la intimidación de la ultraderecha asume la forma de atentados, amenazas a posibles votantes, ataques a manifestaciones de la oposición, acciones en las cuales a menudo toman parte o contemplan pasivamente las fuerzas del ejército.

¿Cuál sería la lógica de estas acciones? En nuestra opinión aparte de motivaciones irracionales de exclusión política, creemos que un cálculo electoral al respecto pasa por limitar la expansión del número de votantes; así no importaría cuántos se inscriben; lo que interesa es cuántos votan. Esto descansaría en un supuesto: la votación de ARENA no es mayormente afectada por la intimidación (como es obvio) y además es una votación "dura", es un voto militante; en realidad sólo representa cerca del 20% del total de inscritos; pero si sólo vota la mitad de éstos, se transforman proporcionalmente en la mitad. Entonces el nivel de intimidación debe ser lo suficiente para disuadir a eventuales votantes de la oposición, y no tanto para empañar la limpieza electoral.

En el otro caso, el de la intimidación ejercida por el FMLN, ésta se practicó en el pasado en los llamados a boicot electoral en los paros de carretera y en la obstaculización en general del proceso. En la última elección la insurgencia cambió de política, como ya señalamos, influida por el clima de la mesa de negociaciones y también por la inutilidad que demostraron estas medidas en el pasado. En efecto, la insurgencia logró amplios paros carreteros, impidió el desarrollo de las elecciones en su territorio, pero no

logró detener el proceso y no afectó en forma significativa la legitimidad tanto del proceso como de las autoridades que de allí surgieron. Como más de alguno diría, se comprobó una vez más que las abstenciones no ganan nunca una elección, por muy combativas que sean. El régimen, por su parte, aprovechó esta conducta del FMLN para mostrarlo como una fuerza que teme a las consultas democráticas, como una fuerza terrorista que sólo confía en las armas y es incapaz de ofrecer una solución a los problemas del país.

Cualesquiera que hayan sido las razones, la insurgencia cambió esta vez su conducta y no obstaculizó el proceso. Pero a esto hay que agregar otro elemento: el FMLN controla territorio, pero se trata de un territorio con escasa población, obviamente de ínfima repercusión electoral. Como se comprenderá, las zonas del FMLN están constantemente sometidas a enfrentamientos, bombardeos, reclutamientos, etc. Por tanto, se han ido despoblando a lo largo de estos 10 años de guerra. En resumen, aún suponiendo que el FMLN con su sola presencia haya intimidado a los ciudadanos afectos a los partidos de derecha, hay que reconocer que dicha intimidación resultó irrelevante en términos del resultado electoral global. No fue así en las zonas controladas por el ejército.

Ya sea por intimidación, por escepticismo o por desinterés generalizado, lo cierto es que el nivel de abstencionismo tiende a consolidarse en el sistema político salvadoreño.

b) En segundo término, es perceptible que ARENA ha sufrido una pérdida relativa de su

papel protagónico en el sistema político, que no es de mayor significación en términos cuantitativos pero sí tendrá mayores impactos en el equilibrio de poderes entre la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo.

Como ya señalábamos, en los primeros años de vigencia del actual sistema político, éste se limitaba prácticamente a la disputa que protagonizaban ARENA y el PDC. La ampliación progresiva de los partidos participantes, con la inclusión de la Convergencia y de UDN, ha complejizado el sistema.

Mientras el sistema político se restringió en lo fundamental a la disputa entre ARENA y el PDC fue inevitable que devinieran gobiernos "monocolores". Así fue durante la administración Duarte (1984-1989) y así continuó con Alfredo Cristiani, pero este último logró una mejor situación: dado que su partido, ARENA, obtuvo la mayoría absoluta en las elecciones parlamentarias de 1988,⁴ dispuso de una elevada concentración de poder, puesto que los areneros manejaban las riendas del poder ejecutivo y las del poder legislativo, y como combinación de ambas, pudieron designar buena parte de las autoridades judiciales. En otras palabras, ARENA monopolizó las instituciones estatales, lo cual se sumaba al entendimiento que rápidamente lograron con el alto mando de las fuerzas armadas.

Esta concentración de poder le permitió a ARENA y al gobierno de Cristiani presentarse como el representante de la "legalidad y la constitucionalidad del país". La voluntad de ARENA predominaba en los tres poderes del Estado. Esto cambia con el resultado electoral de marzo de

1991, periodo en el cual ARENA pierde el monopolio aludido.

Esta nueva correlación de fuerzas institucionales promete traducirse en un mayor campo de conflicto entre el partido de gobierno y la oposición en los años venideros. ARENA tendrá que negociar con la oposición muchas iniciativas y así el sistema político gozará de un mayor balance, pero también se incrementarán los conflictos en ese ámbito, a los cuales no está habituado el sistema.

A modo de ejemplo, hay numerosas iniciativas que pasan por la Asamblea Legislativa, como la designación de autoridades judiciales, aprobación de presupuestos, firma de acuerdos internacionales, tratados, etc. Ello obligará a un mayor juego político de los partidos entre sí, y de los poderes del Estado.

La defensa de la legalidad y el respeto a la Constitución ahora también pueden ser invocados por la bancada demócratacristiana o por la de la convergencia. Al respecto, esta última ha logrado "ampliar los espacios" que se proponía: Rubén Zamora es vicepresidente de la Asamblea; y resultará difícil para la prensa conservadora caricaturizarlo como "aliado de los extremistas", dado que representa a un amplio sector de ciudadanos que lo eligió tan legítimamente como al resto de los parlamentarios.

c) El realineamiento de fuerzas, medido en términos electorales, anuncia que tanto el bloque dominante como la oposición deberán ajustar sus estrategias si quieren consolidar posiciones hegemónicas a futuro, en particular si piensan en las próximas elecciones presidenciales de marzo de 1984. Al respecto, los resultados de las

recientes elecciones ponen en claro lo siguiente en términos prospectivos:

- ARENA ve amenazada la posibilidad de seguir conservando el poder. Si continúa su declive de popularidad, no alcanzará la mayoría absoluta que necesita (50% más uno). Y una mayoría simple obligaría a una segunda vuelta. En nuestra opinión, el declive arenero no descansa necesariamente en su aislamiento político sino en las repercusiones de su política económica, que castiga a la mayoría de la población.
- El PDC, por su parte, si bien ha logrado recomponer sus fuerzas y reagruparlas luego de su crisis de 1988-89 (pérdida del gobierno, división interna) aún está lejos de transformarse en la alternativa prometedora para la ciudadanía.
- En cualquiera de los dos casos, aún suponiendo que tanto el PDC como ARENA dentro de algunos años consoliden una mayoría sustancial, lo cierto es que los hipotéticos gobiernos que de allí surgieran serían gobiernos que se enfrentarían a fuertes oposiciones, no sólo en el plano social, sino también en el institucional. La situación política salvadoreña motiva a pensar que más bien son necesarios gobiernos que cuenten con una amplia base social y política de apoyo, pensando en la pacificación y la estabilidad del país.

Todas estas proyecciones pueden, además de ser acusadas de estáticas, dado que a ellas deben sumarse las fuerzas políticas y los realineamientos en la correlación que implicará la



desmovilización militar del FMLN y su incorporación al sistema político.

Ante este cuadro, se perfilan dos rumbos novedosos en el futuro político.

Uno es la construcción de una alianza entre los sectores moderados y modernizantes del bloque dominante y el PDC. A ello ayudaría una relativa compatibilidad programática entre es-

tas fuerzas, su posición en favor del manejo técnico de las políticas públicas, su percepción de alianza con los Estados Unidos y la aceptación de un sistema democrático representativo. Obviamente, esta perspectiva de centro-derecha sería bien vista por los Estados Unidos por las fuerzas armadas, por buena parte de los gobiernos de la región, y por amplios sectores sociales dentro del país. Tiene dos inconvenientes que no son menores: supone la pérdida de hegemonía de la ultraderecha al interior del bloque dominante; y al mismo tiempo, supone que el PDC admita la posibilidad de no hegemonizar esta hipotética alianza.

No son obstáculos menores, porque lo que ocurre en la actualidad es lo contrario. En ARENA predominan las posiciones más duras; el liderazgo recae indiscutiblemente en la persona del mayor Roberto D'Abuisson y, por lo tanto, la construcción de una alianza de centro-derecha, con las características mencionadas, supone la derrota de D'Abuisson —y de sus posiciones— dentro del partido de gobierno. Por su parte, si bien el PDC ha comprendido la necesidad de hacer alianzas con otras fuerzas, sigue aspirando a hegemonizarlas, y una alianza del tipo de la descrita supone una hegemonía compartida, y de candidatos de consenso.

El otro camino es el de la construcción de una alianza amplia, de un acuerdo de concertación sobre las características del sistema político (acuerdo que para ser estable debe ser suscrito desde el FMLN hasta las fuerzas armadas pasando por todos los partidos políticos). Y sobre la base del respeto a este nuevo sistema, se plantea la próxima elección. Este camino supone una

congruencia más estrecha entre el funcionamiento regular del sistema político vigente — con su calendario electoral respectivo— con el proceso de diálogo negociación que desarrollan el FMLN y las fuerzas armadas.

En esta perspectiva es previsible que se gesticone un proceso de acuerdo creciente entre la Democracia Cristiana y la Convergencia Democrática como fórmula futura de gobierno, que se proponga la derrota política de ARENA pero que asegure que este partido siga participando en el sistema político; que le ofrezca al FMLN un camino de democratización pero que le exija su adhesión al mismo, con la consabida desmovilización de la insurgencia.

Notas finales

Las elecciones de marzo pasado abren posibilidades de un juego político más complejo, sobre todo si advertimos que ninguna de las fuerzas principales está por alterar sustancialmente el sistema político. El FMLN y la Convergencia están por profundizar lo que denominan “espacios democráticos”, el PDC aspira a consolidar un sistema político al que considera obra suya, ARENA tiene la titularidad del sistema en la actualidad y aspira a conservarla. Los Estados Unidos perciben que el afianzamiento del proceso democrático en El Salvador es una de las mejores formas de poner fin al conflicto y, de paso, darle un curso político a la insurgencia.

Pero pasado el momento electoral, se reactivan los procesos más permanentes: la guerra y la negociación.

Los Acuerdos de México, suscritos a fines de abril de 1991, representan un avance en materia de reformas constitucionales, pero es un adelanto insuficiente comparado con los propósitos que las partes expresaron en la Agenda de Caracas respecto a lo que esperaban de tal negociación. Pero lo peor era una ruptura de las negociaciones. Esto estuvo a punto de ocurrir cuando la bancada arenera saliente presentó dificultades para la aprobación de las reformas constitucionales que había acordado la representación gubernamental con el FMLN.

Resulta difícil, cansado y poco clarificador a ratos, adentrarse en la maraña de proposiciones, contrapropuestas, acuerdos preliminares, y toda clase de documentos que han pasado por la mesa de negociaciones. De hecho es un seguimiento que el autor no ha realizado con detenimiento,⁵ pero a todas luces el Acuerdo de México es claramente menor en extensión y profundidad si tomamos como referencia la citada Agenda y las proposiciones que realizó a finales del año pasado el gestor de buenos oficios, Álvaro de Soto.

La negociación continuará, con altos y bajos; están marcados los límites que cada parte pone. El FMLN no procederá a su desmovilización unilateral si previamente no se cumplen una serie de acuerdos en materia de democratización, desmilitarización y depuración de las fuerzas armadas. Tienen ante sí el síndrome colombiano, donde la insurgencia fue decapitada en gran medida por escuadrones paramilitares una vez que accedió a deponer las armas. El FMLN se percibe crecientemente como un factor que impulsa la democratización del país, y no

está en su programa inmediato la toma revolucionaria del poder.

El ejército, por su parte, además de estar cruzado por tendencias con respecto a este punto, tiene como común denominador la defensa de su papel monopólico en materia de fuerza armada en el país. No aceptará jamás la tesis de los dos ejércitos, ni menos la de la fusión. Podrá negociar su disminución numérica, el abandono de funciones policiaco-represivas, estará de acuerdo en una "depuración" de la oficialidad, pero no negociará su integridad institucional. Para los militares salvadoreños un buen ejemplo de desmilitarización del sistema político lo constituye la trayectoria de la transición chilena (o sea, acatamiento por parte de la oposición del sistema político, autodepuración de las fuerzas armadas y respeto del poder civil a la jerarquía y la línea de mando castrense, entre otros aspectos).

El Gobierno velará celosamente porque la negociación no altere significativamente el marco constitucional vigente. La defensa del ordenamiento jurídico actual y del régimen económico pareciera ser la línea última de negociación por parte de los sectores sociales que se identifican con la gestión de ARENA y Cristiani.

En este contexto, mientras no se llegue a un acuerdo global, la guerra continuará, pero su intensidad será menor. El FMLN está maniatado para lanzar ofensivas; a sus dificultades logísticas le suma el temor de que una ofensiva fuerte se traduciría de inmediato en un incremento de la ayuda militar de parte de Estados Unidos a las fuerzas armadas. El Ejército, aunque quisie-

ra, no puede asestar golpes estratégicos contra la insurgencia dada su fuerza.

La situación es curiosa: ninguno de los dos bandos militares se siente derrotado y por el contrario, ambos perciben que han alcanzado buena parte de sus objetivos estratégicos. El FMLN se percibe a sí mismo como la fuerza impulsora de la democratización del país y el ejército mira con satisfacción que una revolución de tipo marxista ya no está *ad portas*.

De esta manera, reafirmamos algo que ya hemos sostenido en anteriores oportunidades: si bien el proceso salvadoreño está compuesto por una compleja articulación de elementos (guerra, negociación, elecciones, entre otros) la tendencia que se perfila es la de una creciente politización. En otras palabras, sostenemos que el eje de este proceso se concentrará en los elementos políticos, en detrimento de los elementos militares, lo cual no excluye la permanencia de estos últimos, pero ahora con un mayor nivel de integración a los aspectos políticos del proceso.

Notas

- 1 Las reuniones de La Palma, Ayagualo y las realizadas en la Nunciatura, todas bajo la administración de Duarte, se desarrollaron sin estar en coyunturas electorales. La más importante al respecto fue la elección presidencial de 1989, cuando semanas antes de la misma, el FMLN sorprendió al sistema político al plantear una prórroga de la consulta y anunciar su eventual participación.
- 2 Una vez más, ésta es una estimación, dado que en el país desde hace varias décadas no se llevan a cabo los censos decenales. A pesar de proyectarse el crecimiento de la población, los resultados no son del todo confiables puesto que una buena parte de la población joven ha emigrado al extranjero en busca de trabajo; obviamente, se trata de población en edad de votar, un cálculo conservador los estima en más de medio millón.
- 3 Al respecto, una encuesta nacional encargada por la Convergencia reflejaba lo dicho.
- 4 A la mayoría absoluta que ARENA obtuvo en las elecciones parlamentarias (más de 30 diputados de una Asamblea de 60) se sumó una docena y media de diputados del MAC —escisión de la DC— con el cual llegó a rápidos acuerdos, fórmula popularmente conocida como la "Macarena", más los consabidos apoyos del PCN. Así, ARENA dispuso a lo largo de su primer año de gobierno de una mayoría legislativa cómoda.
- 5 Entrevistando a un analista cercano a la negociación, éste reconocía que era virtualmente mareador la cantidad de materiales escritos —sin contar con las gestiones oficiosas— que rodean la mesa principal... "Se necesitaría una beca para poder estudiar a fondo todos los materiales y sus implicaciones", comentó.

